

Informe anual:

HRW alerta de “rampante” deterioro democrático en América Latina

La ONG subrayó un avance del autoritarismo y advirtió sobre el rol de la criminalidad.

FRANCE PRESSE Y EL
 TIEMPO/COLOMBIA/GDA

Desde Venezuela a Nicaragua, pasando por Haití, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú o Argentina, el deterioro democrático en América Latina fue “rampante” en 2024, según la ONG Human Rights Watch (HRW) que publicó ayer su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo.

El informe mundial 2025, en el que a lo largo de cerca de 550 páginas HRW repasa la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en más de un centenar de países, recuerda que la “reticencia cobarde” de muchos gobiernos para defender a los más pobres supone la “erosión” de las normas internacionales.

“Tristemente, la democracia en América Latina continuó deteriorándose”, en 2024 dijo a El Tiempo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, quien mencionó “el fraude electoral en Venezuela y la violencia poselectoral que dejó 2.000 detenciones arbitrarias y 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes”, el retiro de la nacionalidad a los presos políticos en Nicaragua, el aumento de las detenciones a disidentes en Cuba, así como los prolongados estados de excepción en El Salvador, Ecuador y Honduras, “con denuncias crecientes sobre abusos en el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas”.

A las amenazas para los derechos humanos se suma la “mayor sofisticación e internalización” del crimen organizado y las



2024, DIJO GOEBERTUS, estuvo marcado por la cuestionada elección venezolana y la represión poselectoral que dejó más de 2 mil detenidos. En la foto, familiares buscan a personas arrestadas en manifestaciones opositoras.

“muy ineficaces” respuestas gubernamentales, recuerda Goebertus en otra entrevista con France Presse.

Es el caso del “populismo punitivo” que practica El Salvador, donde en dos años y medio se ha detenido a 83.000 personas y 300 han muerto en la cárcel, “sin que haya habido un proceso de investigación” interno.

O en Ecuador, que lleva un año en estado de excepción aumentando los casos “de excesos de uso de la fuerza, torturas, desapariciones, y ejecuciones extrajudiciales”.

“Tenemos políticas cortoplacistas de mano dura basadas en el encarcelamiento masivo, pero sin capacidad real de investigación técnica judicial para develar estructuras”, lamenta la experta, que pide “inversiones a más largo

plazo” para “fortalecer nuestra capacidad de administración de justicia real”.

El “fenómeno paralelo” del crimen organizado

El avance del autoritarismo —que se “consolida en Venezuela” tras una “elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo”— y la degradación de la democracia, van no solo junto al crecimiento del “fenómeno paralelo” del crimen organizado, sino que también a la corrupción y la pérdida de independencia judicial, dijo Goebertus en las entrevistas.

La directora también planteó el crimen organizado como un factor problemático en países como Perú, Colombia y Haití. En este último, las bandas criminales han

sembrado el terror ante la “ausencia absoluta de un Estado”.

Para HRW, en México hay un caso un poco diferente, ya que ahí la violencia extrema del crimen organizado se suma el “abuso generalizado por parte de agentes estatales con casi total impunidad”. La ONG también pone la atención en los recientes cambios constitucionales para reforzar el papel del ejército en las labores policiales y revisar el sistema de justicia, podrían “perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de Derecho”. En este mismo ámbito judicial, HRW expresa preocupación por Guatemala, donde dice que hay falta de independencia judicial debido al proceso de selección de los que deben impartir la justicia y a las injerencias políticas que benefician a los poderosos.

“Poco o ningún esfuerzo”

En Colombia, los abusos de los grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, en particular en el ámbito rural, y las comunidades indígenas y afrodescendientes preocupan también a los autores del informe, pese a que destacan la reciente ratificación del acuerdo de Escazú por el gobierno de Gustavo Petro.

Según el informe, en Perú, la Presidenta Dina Boluarte “hizo poco o ningún esfuerzo” para detener los ataques perpetrados por el Congreso que aprobó leyes que “socavaron la independencia judicial, debilitan las instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y las violaciones de los DD.HH.”.

En Argentina, el primer año del gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por “nuevos desafíos” a los DD.HH., obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión y reunión y la retórica oficial hostil contra periodistas y la comunidad LGBTI, sostiene.

Por su parte, Honduras sigue luchando contra la corrupción generalizada, un poder judicial comprometido, altos niveles de violencia y ataques contra los defensores del medio ambiente.

Aunque la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil ha supuesto una luz de esperanza con la caída de 30% de la deforestación de la Amazonía, o la aprobación de leyes para proteger los derechos digitales de la infancia, la policía había matado hasta septiembre a 4.565 personas, más de 80% negros.